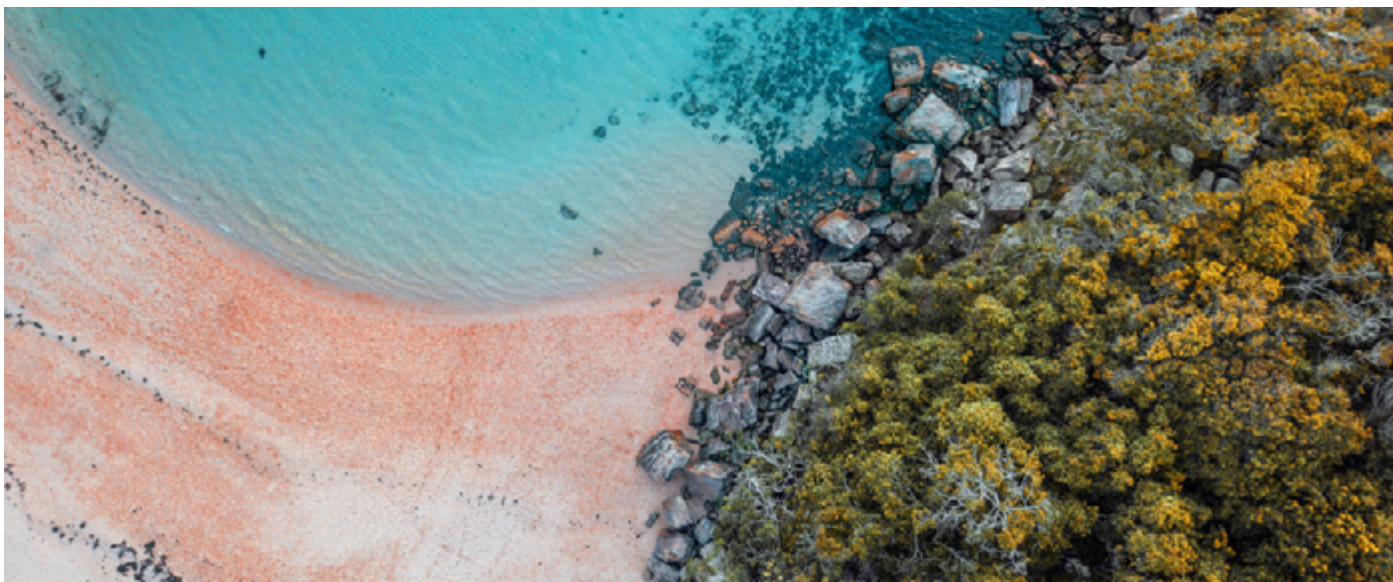


A nivel internacional

Australia



Desde el año 2020 en Australia es obligatorio hacer un **“Impact Analysis”** (análisis de impacto) para todas las propuestas de políticas o acciones por parte de las agencias y departamentos del gobierno. La **Oficina de Análisis de Impacto** (OIA), englobada dentro del Departamento del Primer Ministro y del Gabinete se encarga exclusivamente de proporcionar las directrices, el material y el apoyo necesarios para la correcta implementación del Impact Analysis.

La OIA actualizó en 2023 la **“Australian Government Guide to Policy Impact Analysis”**, una guía acerca de cómo evaluar los posibles efectos que una política puede tener sobre la población, las organizaciones comunitarias y los negocios **desde todos los ángulos posibles** y así poder elegir el mejor camino a seguir para su implementación. Accede a la Guía [aquí](#).

El proceso del Impact Analysis consta de **7 preguntas clave** o etapas:

1. ¿Cuál es el problema a solventar y qué datos hay disponibles?
2. ¿Cuáles son los objetivos? ¿Por qué es necesaria la intervención del

gobierno para su consecución y de qué manera se cuantificará el éxito en su cumplimiento?

3. ¿Qué opciones políticas se están considerando?
4. ¿Cuáles son los beneficios netos de cada opción?
5. ¿A quién se ha consultado y cómo se han incorporado sus recomendaciones?
6. ¿Cuál es la mejor opción de todas las consideradas y cómo se va a implementar?
7. ¿Cómo se va a evaluar el éxito de los objetivos y cuál es el plan de seguimiento?

Como parte de la cuarta pregunta se requiere considerar **los posibles efectos de la política propuesta sobre las comunidades y grupos de personas afectadas**, teniendo en cuenta sus **necesidades y especificidades** (edad, cultura, lugar...), evaluando así como puede afectar a su calidad de vida, empleo o economía.

Aparte de poder consultar y recibir apoyo de la OIA durante todo el proceso, esta lleva a cabo dos revisiones formales exhaustivas del Impact Analysis,

una tras completar las cuatro primeras preguntas, y otra al finalizarlas todas.

Buena parte del territorio australiano, al margen de las grandes áreas metropolitanas (como Sídney, Brisbane o Melbourne), se consideran zonas regionales, y en ellas reside **más de un tercio de la población** (9 millones de personas). Es por ello que, de manera adicional, el Departamento de Infraestructuras, Transportes, Desarrollo Regional, Comunicaciones y Arte (DITRDCA) ha desarrollado una guía para el diseño de políticas que tengan algún impacto en la **Australia Regional**.

Aunque no es de obligado cumplimiento, el DITRDCA recomienda que se lleve a cabo un **“Regional Australia Impact Statements”** (RAIS) para todas aquellas propuestas de políticas del gobierno que se vayan a desarrollar en la Australia Regional, o que, si se van a aplicar en zonas regionales y metropolitanas, su impacto o efectividad difiera entre ambas. Esta evaluación de impacto regional consiste en el **método checklist**. Accede a la Guía del RAIS [aquí](#).



¿Sabías qué?

En Australia, cada estado ha diseñado su propio Análisis de Impacto que se aplica de forma obligatoria en el diseño de las políticas estatales.

- **Australia del Sur** ha sido un estado pionero en el desarrollo e implementación de su propio **mecanismo de Rural Proofing**, o en este caso **Regional Proofing**, puesto que desde 2003 implementa el denominado **“Regional Impact Assessment Statement”** (RIAS).

El RIAS consiste en aplicar de manera transversal al diseño y revisión de toda la normativa una **checklist** para tener en cuenta la perspectiva de las zonas regionales y rurales. Actualizado por última vez en 2022, el Gobierno de Australia del Sur proporciona un **manual**

y guías para el correcto desarrollo del RIAS. En el caso de tener un impacto significativo sobre las comunidades, negocios u organizaciones regionales, se requiere también realizar un **“Regulatory Impact Statement”** (RIS), el cual consiste en responder y documentar de manera exhaustiva las mismas 7 preguntas incluidas en el Impact Analysis de la OIA.

En cuanto al resto de estados, ninguno cuenta con un Mecanismo Rural de Garantía como tal, sino que han de realizar un análisis evaluando los posibles impactos económicos, sociales y medioambientales de la nueva regulación. Al ser más general el ámbito de estos impactos, dependiendo de cada caso, la entidad legisladora optará por considerar o no las áreas rurales o remotas dentro de su análisis.

En cualquier caso, tanto a nivel de país como de estados, los gobiernos han optado por seguir un **modelo transparente en el desarrollo de sus políticas**, proporcionando fácil acceso a todos los documentos que se entregan sobre el impacto de las políticas propuestas. Dichos análisis de impacto, requieren además de **la participación no solo de consultorías y personas expertas, también de la ciudadanía y las entidades locales**.

- En **Nueva Gales del Sur**, los impactos económicos, sociales y ambientales de la política propuesta se analizan a través del **“Better Regulation Statement”**. Además, para aquellos proyectos estatales de mayor significancia, también es obligatorio entregar una **Evaluación de Impacto Social**, en el que se tendrá en cuenta



el **contexto regional**. Consulta las respectivas guías [aquí](#) y [aquí](#).

- En **Queensland** se introdujo en 2023 un proceso para asegurar el correcto diseño e implementación de las políticas estatales denominado **“Better Regulation Policy”**. Como parte del proceso ha de realizarse un análisis de impacto, el **“Regulatory Impact Analysis”** que consta de 5 pasos, siendo el más relevante la preparación de una declaración del posible impacto de la política propuesta sobre diversos ámbitos: el **“Impact Analysis Statement”** (IAS). Mediante el método **checklist**, el IAS ha de tener en cuenta, entre otros factores, el **desarrollo de las zonas regionales**. Consulta la estrategia de Queensland [aquí](#).

- **Tasmania** actualizó en 2023 el **Manual de Gobierno**, un extenso documento que incluye las directrices a seguir para cualquier procedimiento relacionado con el gobierno estatal. El Manual incluye una sección referente a declaraciones de impacto, una de las cuales es la denominada **“Social/Community Impact Statement”**. Esta declaración es obligatoria para nueva normativa y revisión de la existente, e implica analizar el efecto de la propuesta sobre el bienestar de ciertos grupos, como **comunidades remotas o aisladas**. Accede [aquí](#) al Manual.

- En **Victoria**, existe una Guía que regula el diseño de las políticas (**“Victorian Guide to Regulation”**) que está conformada por las 7 preguntas clave que establece el OIA en su Impact Analysis. La Guía incluye la

obligatoriedad de redactar un **“Impact Assessment”**, donde normalmente se suele tener en cuenta la perspectiva de la Victoria Regional o de las áreas rurales o remotas. Consulta la Guía [aquí](#).

- Por último, en **Australia Occidental** está en marcha el **“Better Regulation Program”** (BRP), un programa que guía el desarrollo, diseño e implementación de las propuestas normativas estatales. Aunque el BRP se centra sobre todo en los posibles impactos sobre la economía, uno de los seis pasos que obliga a seguir este manual, es llevar a cabo un análisis de impacto no solo económico, sino social y medioambiental, incluyendo los efectos sobre ciertos grupos, comunidades o regiones. Consulta el BRP [aquí](#).

(NRHA 2015).